

## **Control migratorio en la Argentina reciente. Hacia un mapeo de los efectos de la modificación a la Ley de Migraciones a través de las acciones judiciales**

Migration control in current Argentina. Towards a mapping over the effects of changes in Migration Law through legal claims

**Lila García<sup>1</sup>**

### **RESUMEN.**

En diciembre de 2015 gana en la Argentina la coalición de derecha “Cambiemos” y, con ella, comienzan a evidenciarse síntomas de una nueva mirada en materia migratoria que alcanza su máxima expresión en la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) nro. 70 (emitido en enero de 2017) dirigido a modificar la ley 25.871. En esta oportunidad, se propone abonar al diagnóstico de los efectos del DNU a través de análisis cuantitativo de las causas judiciales promovidas a nivel nacional. El período relevado comprende de febrero 2015 a diciembre 2017, en quince fueros federales del país. Finalmente, y para poner en debate los números resultantes, se incorporan datos sobre órdenes de expulsión, cancelaciones de residencia y expulsiones ejecutadas para el mismo período. En las conclusiones, se avizora un importante desplazamiento de los reclamos hacia el Poder Judicial.

**PALABRAS CLAVE:** Migración. Control migratorio. Expulsion. Poder Judicial. Argentina

### **ABSTRACT.**

In December 2015 a right-wing coalition (“Cambiemos” or “Let’s Change”, in English) won elections in Argentina and since then a new view of migration begun to take form, reaching its maximum expression by National Decree (DNU) No. 70, issued on January 2017 by the Executive Branch and aimed to modify Law 25,871. In this paper, I seek to contribute to a

---

<sup>1</sup> Lila García, Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-CIDDH (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina). Doctora por la Universidad de Buenos Aires.

diagnosis on the DNU effects through a quantitative analysis of lawsuits submitted, at national level. The period in analysis covers from February 2015 to December 2017, for fifteen jurisdictions. Finally, and to put into context the results, some data from expulsion orders, residency cancellation and removal executions are incorporated. In the conclusions, an important shifting of claims to Judiciary Branch is perceived.

**KEYWORDS.** Migration. Migration control. Expulsion. Judiciary Branch. Argentina.

## **Introducción**

En diciembre de 2015, la fórmula “Cambiamos” gana las elecciones en la Argentina luego de doce años de un gobierno que había auspiciado una política en derechos humanos y, con este triunfo, nace una extendida preocupación acerca del futuro de la política migratoria en Argentina. Por un lado, existe consenso en señalar que la asunción del gobierno de Mauricio Macri (un empresario con trayectoria política en la Ciudad de Buenos Aires) enlaza a la Argentina en la “restauración neoconservadora” (Romero, 2016) a la cual ha virado en los últimos años sino Latinoamérica, al menos el Cono Sur. Por otro y aunque los análisis son aún incipientes, todo indica que Argentina se ha alineado con el modelo securitario para las migraciones pero, sobre todo, con el discurso estadounidense generado por la gestión de D. Trump: el proyecto neoliberal propuesto por el gobierno entrante tendrá como contrapartida, según Alvites, la “coerción de ciertos derechos de los que intentan circular” (2017: 141).

Este giro es preocupante por la referencia que la ley argentina de migraciones representa para la región: en vigencia desde 2004 (y que lleva el Nro. 25.871), se trata de una legislación que reconoce el derecho humano a migrar y varios otros derechos para las personas migrantes. Constituyó así un hito en dos sentidos: para la Argentina, un cambio histórico luego de décadas de leyes restrictivas; para la región, un “modelo” tanto para las legislaciones latinoamericanas (que fueron progresivamente incluyendo derechos para las personas migrantes, incluso el derecho humano a migrar) como para los avances en el MERCOSUR (García, 2016). Es así que se la califica como referente (Hines, 2010) o modelo regional en la protección de derechos de las personas migrantes.

Con todo, esta legislación mantuvo las facultades de expulsión del Estado argentino y esta fue justamente una de las continuidades más preocupantes: la posibilidad de expulsión por irregularidad migratoria (Ceriani, 2004), la existencia misma de criterios de admisión y permanencia (Courtis y Pacecca, 2007) o la permanencia de la división legal/ilegal (Domenech, 2010). En suma, por la misma fragilidad que acarrea para la persona migrante el amplio margen de discrecionalidad dejado al Estado.

En la ley, para el balance entre unos (derechos) y otras (facultades de exclusión del Estado) se previó la intervención del Poder Judicial a través de las nuevas competencias que le fueran expresamente reconocidas; este aspecto es también inédito para la experiencia

latinoamericana, ya que las legislaciones de migraciones no prevén un mandato expreso para que el Judicial intervenga en política migratoria. En los hechos, la tensión entre los derechos de las personas migrantes y las facultades expulsivas del Estado argentino se resolvían mayormente mediante el uso de excepciones (por razones humanitarias, reunificación familiar, etc.). En una conferencia que el ex titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), M. Arias Duval diera en 2012, pregunté cómo se articulaba el derecho a migrar (que él mismo había destacado en su alocución) con las múltiples categorías y requisitos formales que imponía la ley y las regulaciones inferiores, en particular cuando unas y otros socavaban aquél primer derecho. En su respuesta hizo hincapié en la existencia de la “vía de la excepción” de que disponía DNM para hacer admitir a personas que no entraban formalmente en ninguna de las categorías o tenían algún obstáculo y necesitaban una dispensa. A propósito de eso señalé en su momento que

“no deja de preocupar algo que señalaba el mismo Arias Duval y fue recalcado por los expositores que lo siguieron: cuando existe voluntad política, todo es posible. La cuestión es que supeditar los derechos a una vía de excepción puede provocar que, con otra voluntad política, los <<marcos legales se constituyan en verdaderos obstáculos>> (Breedy, 2012)” (García 2013: 177).

Este sistema de excepciones dejaba también remanentes varios problemas en el mediano y largo plazo. El primero es el hecho de la excepción misma, que merma la operatividad del derecho a migrar; el segundo es que las órdenes de expulsión sólo quedaban suspendidas, lo cual sugería que podían ser reactivadas en el futuro; tercero, al quedar claro que un cambio de política, de mirada sobre las migraciones, haría peligrar el frágil sistema de excepcionalidad y casuística que venía aplicando DNM. Por otra parte, y como reproduce Alvites (2017), el control de ingreso y permanencia en torno a las migraciones es parte del núcleo estándar del imaginario liberal, a lo que se suma un contexto regional regresivo en materia de derechos y con una agenda marcada desde Washington como particularmente virulenta para las personas migrantes.

Por las declaraciones informales de altas autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones se confirmaría poco después de la asunción de las nuevas autoridades que buscarían modificar la ley de migraciones de manera de ajustarla al nuevo proyecto liberal y

neoconservador. Es así que en enero de 2017 y mediante un decreto del Poder Ejecutivo de “necesidad y urgencia”, que será el DNU nro. 70/2017, se reforman (o más bien, se pretenden reformar) aspectos sustanciales de la ley de migraciones.

Muy sucintamente, el decreto 70/2017: (i) amplía los supuestos de expulsión de personas extranjeras (vía apertura del universo de ilícitos penales y de cancelaciones automáticas de residencia ante una sentencia penal de cualquier tipo); (ii) acorta los plazos de todos los actores en política migratoria (defensores, fiscal, juez, cámara, etc.) excepto los propios de DNM; (iii) reduce las posibilidades de la reunificación familiar, agravando las condiciones para acceder a las dispensas e imponiendo requisitos que debe cumplir la vida familiar para ser reconocida como tal; (iv) dificulta el acceso a la defensa pública gratuita; (v) amplía el uso de la retención; (vi) restringe los derechos a que habilita la residencia precaria cuando se hayan interpuesto recursos.

Varias reflexiones previas se han referido a este decreto y sus posibles o incipientes efectos. Por un lado, se señala que constituye un mecanismo de “mayor control social” y de “expansión de una retórica de la amenaza y de la sospecha sobre las poblaciones más pobres, especialmente las que viven desde hace décadas en la Argentina” (Caggiano, 2017). Más específicamente, se indica que acarrea “una fuerte estigmatización del colectivo extranjero, una errónea asimilación entre delito y extranjería y un cambio en la política migratoria que indudablemente implica un retroceso en materia de protección y promoción de los derechos humanos” (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2017: 4).

Por este retroceso, que además “reinstala la práctica estatal de reglar los aspectos migratorios sin mediar el tratamiento legislativo” (González, 2017: 84), varios organismos internacionales, nacionales y de la sociedad civil se pronunciaron en contra de este decreto con sendos dictámenes, como la Defensoría de Ciudad de Buenos Aires (Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires 2017) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (2017), comunicados (OEA-CIDH, 2017) o informes vinculantes para la Argentina (NU-Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, 2017); al punto que un conjunto de organizaciones (varias de aquella Mesa de Migrantes que había impulsado la ley de migraciones 25.871) promovieron una acción de amparo para que el Poder Judicial declarara la inconstitucionalidad del DNU tanto por su forma como por el fondo. En marzo del corriente

año, la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la acción y declaró que el decreto era “nulo de nulidad absoluta”.<sup>2</sup>

Mientras tanto (pues esta sentencia, a la fecha, fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación), esta contribución busca abonar al panorama de las repercusiones del decreto 70/2017 en su primer año de vigencia, mediante el relevamiento de las causas judiciales promovidas en los fueros federales del país. Este fuero (también llamada “justicia federal”) es el competente para intervenir en la aplicación de la ley de migraciones, según ella misma lo dispone (art. 98). En general, las demandas contra el Estado Nacional (o sus dependencias, como serían la Dirección Nacional de Migraciones, las fuerzas de seguridad nacional o la policía federal) se tramitan en ese fuero.

Existen actualmente diecisiete (17) fueros federales en el país y para este trabajo se ha relevado quince (15) causas judiciales de ellos: un fuero, el de San Justo, no está aún en funcionamiento; el otro excluido es el de la Capital Federal, cuestión a la que me referiré en la discusión de resultados. En estos quince, el relevamiento se hizo bajo la hipótesis de que habría un crecimiento importante de causas judiciales a raíz del DNU.

Para contar con puntos de referencia, se tomaron los resultados obtenidos desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, para así comprender tanto el cambio en la gestión política como la emisión del DNU. Esto es, causas judiciales iniciadas entre enero 2015 y diciembre 2017. Ya para noviembre de 2016, un servicio de acceso a la justicia que trabaja con poblaciones vulnerables, ATAJO, daba cuenta que se habían duplicado las consultas de migrantes relacionadas con expulsión, residencia y documentación (Rosende, 7 de noviembre de 2016). Los resultados para 2018 se toman sólo en las conclusiones para poder proyectar alguna previsión para el resto del año.

En la sección a continuación se delinea el mandato que la ley de migraciones previó para el Judicial y se describen brevemente las características del fuero competente, por ahora el federal. En la sección 3 se explica la metodología usada para la búsqueda de actuaciones en

---

<sup>2</sup> Centro de Estudios Legales y Sociales y otros c. Estado Nacional, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Migraciones s/ amparo 16.986, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, sentencia del 22 de marzo de 2018.

los fueros, así como para la depuración de resultados. En la sección 4 se computan estos en demandas iniciadas por DNM o contra ella, distinguiendo el crecimiento para el período trabajado y se compara con la información disponible sobre la actuación de DNM (cantidad de órdenes de expulsión y expulsiones propiamente dichas, operativos de control de permanencia, etc.) en pos de completar el panorama para proyectar, en la última parte, algunas conclusiones sobre el impacto del cambio de gestión y más particularmente, del DNU.

### **1. La intervención judicial en la ley de migraciones en relación al decreto 70/2017**

Una muy necesaria novedad que trajo la ley argentina de migraciones 25.871 es la participación del Poder Judicial en ciertas instancias claves de la aplicación de la política migratoria en sentido estricto, esto es, del control migratorio. En primer lugar, fue necesaria en cuanto la ley reconoció “derechos” de la persona migrante y “facultades” del Estado, cuyo balance debería ser conferido a un órgano imparcial; en segundo lugar, fue novedosa tanto para la Argentina como para la región. Para la primera, hasta 2004 el Poder Judicial intervenía por vía de excepción y rechazaba inmiscuirse en política migratoria (Ceriani, Morales y Ricart, 2006); para la región, las legislaciones migratorias no establecen específicamente la intervención del Poder Judicial en política migratoria. Constituye entonces una experiencia enteramente nueva, con una ley basada en derechos, con pocos puntos de referencia. A ello se suma que, sea por esta falta de un rol específico como por la poca dedicación a la investigación de los profesionales del Derecho, la cuestión haya recibido poca atención: los aportes jurídicos en general y en particular los referidos a la actuación del Poder Judicial en política migratoria cuentan con escasas producciones. Para la Argentina en particular, Domenech y Pereira (2017) relacionan los abordajes desde las ciencias jurídicas con una etapa más reciente en las generaciones de estudios migratorios.

En la ley argentina de migraciones, el Poder Judicial tiene un rol general de garante de derechos que incluye específicamente un amplio acceso a la justicia (art. 6),<sup>3</sup> junto con varias instancias donde se prevé la actuación judicial, a veces con carácter obligatorio. Entre ellas, se encuentran el autorizar las órdenes de retención (art. 70), esto es, de detención a los fines

---

<sup>3</sup> “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario... a la justicia” (art. 6, ley 25.871).

de la expulsión y revisar las órdenes de expulsión que cancelen residencias (art. 61). El primero ha tenido un uso más aceitado que el segundo, cuyo paradero es prácticamente desconocido (García, 2013). Entre las intervenciones no obligatorias pero posibles, el Poder Judicial puede intervenir por vía de acciones legales presentadas por personas migrantes que impugnen decisiones adversas de la Dirección Nacional de Migraciones. En suma, la intervención de los tribunales en el proceso migratorio tiene lugar en dos grandes esferas: i) como operador directo; por ejemplo, decretar detenciones de personas migrantes con fines de su expulsión (“retenciones”, previstas en el Artículo 70 de la Ley 25871) ii) como revisor de las decisiones de la autoridad migratoria, que es la DNM.

En concreto, la sección judicial interviniente en el fuero federal. En Argentina, es un fuero de excepción, lo que quiere decir que es competente sólo cuando una regulación general (Constitución o ley federal) le asigne competencia. Una de estas reglas generales indica que siempre que se demande al Estado Nacional, corresponderá en principio el fuero federal en su versión “administrativa”; esto es porque el fuero federal se divide además por materia (penal económico, civil y comercial, administrativo, criminal y correccional). Varios fueros federales del interior del país tienen una organización “multifuero”, esto es, sin todas o alguna de estas divisiones por materia.

A su vez, existe una división territorial y en ese sentido es que la “justicia federal” se encuentra organizada en diecisiete (17) secciones o jurisdicciones: algunas agrupan varias provincias y en otros casos, una misma provincia contiene varias secciones, como es el caso de Buenos Aires.



*Imagen 1. Mapa de la justicia federal en Argentina*



Fuente: Instituto de Investigaciones. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disponible en: <http://www.csjn.gov.ar/dbei/ii/cf/mapa.html>

A los efectos de iniciar una acción judicial, debe tenerse en cuenta el lugar del hecho o el domicilio del demandado. Aunque las reglas de asignación de competencia territorial suelen ser complejas (y dan lugar incluso a procedimientos abreviados dentro de un reclamo para determinar tanto si corresponde a la justicia federal como a qué sección territorial de ella), alcanza con tener en cuenta que cuando Dirección Nacional de Migraciones inicia una acción (por ejemplo para pedir la “retención” de una persona extranjera), lo hace en la sección que corresponda al último domicilio de la persona; cuando una persona impugna una resolución de expulsión, lo hace en la sección que corresponda a la delegación de DNM que haya emitido la orden. Esto, porque además de la delegación central de DNM que funciona en la Ciudad de Buenos Aires y que concentra la mayoría de los trámites, hay otras treinta (30) delegaciones a lo largo del país.

En los hechos, la justicia federal se organiza en una llamada “Primera Instancia”, que es un juzgado con juez único, una “Segunda Instancia” o corte de apelaciones, también llamada “Cámara de Apelaciones”, tribunal formado por tres jueces y que puede tener varias “salas”

(esto es, es una misma Cámara pero cada Sala, de tres jueces, funciona con relativa independencia, por lo que puede dar lugar a sentencias contradictorias). Las sentencias de la Cámara pueden ser apeladas, de manera excepcional, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es el procedimiento estándar ante el fuero federal en materia administrativa.

En este panorama, el DNU 70/2017 trajo varias novedades para el Judicial. Primero, dispone que las dispensas o “perdones” a la expulsión sólo pueden ser otorgados por DNM y no por el Judicial (art. 62 bis). Esta previsión del decreto reacciona frente al ejercicio de balance que el Poder Judicial venía efectuando: aunque no con mucha frecuencia, las sentencias que revisaban órdenes de expulsión y las declaraban irrazonables, protegiendo así el derecho a la reunificación familiar por ejemplo, venían ganando terreno.

Segundo, acorta los plazos de los procesos: desde el período para interponer la acción judicial ante decisiones de DNM (de 30 a 3 días), hasta la vista al fiscal por la competencia (dos días) y la resolución judicial misma (un día, según se lee en el art. 69 septies, tercer párrafo), así como para el trámite en la segunda instancia. Dentro de este plazo tan breve, el decreto regla que también puede incluirse un pedido de retención, que antes tenía un trámite aparte (art. 69 octies).

Al mismo tiempo que el decreto adelgaza la intervención judicial (sea en las formas, los plazos, como en sus posibilidades de intervención), amplía los supuestos de expulsión y simplifica al máximo los trámites administrativos, al punto de aprobar un “procedimiento sumarísimo” para las expulsiones. En los hechos, es difícil construir los efectos de estas modificaciones, sobre todo por la falta de estadísticas oficiales y en general, de información pública sobre expulsiones, residencias y política migratoria; se volverá sobre este punto en la discusión de resultados. Como hipótesis, se asume que las causas judiciales aumentaron a raíz del decreto 70/2017.

## **2. Metodología**

Para este trabajo se buscó replicar buena parte de la metodología usada para la tesis de doctorado de la autora. En ella, esta autora se dedicó a ver expedientes y sentencias del fuero federal de la Capital Federal, que era el que correspondía a Dirección Nacional de Migraciones sede central. En aquella oportunidad se solicitó un listado de todas las causas

por o contra DNM en la Mesa de Entradas de la Cámara, cargándola en una base de datos básica en “Access” para hacerla trabajable y se listó las causas judiciales por juzgado (del 1 al 12), donde se terminó consultando los expedientes de manera presencial, juzgado por juzgado. Las sentencias de la Cámara de Apelaciones fueron obtenidas mediante una oficina particular llamada “Sector Jurisprudencia” (García, 2013), también de manera presencial ya que las actuaciones no estaban disponibles en línea y tampoco la mayoría de las sentencias.

Es así que la posibilidad de hacer una aproximación nacional sobre las causas judiciales viene dada por las bases de datos públicas disponibles en línea, toda una novedad para el Poder Judicial en Argentina. En esta accesibilidad a los fueros federales del país (que por ejemplo Ceriani, Morales y Ricart señalaban en 2006 como una fuerte limitación para conocer el estado de situación en el interior de la Argentina) es determinante la progresiva digitalización de expedientes (una “nueva era en el Poder Judicial” que se completó, para la justicia nacional y federal, hacia 2014 –“El sistema informático de gestión judicial llegó para quedarse”, 11 de junio de 2013), que viene ocurriendo tanto en el Poder Judicial como en la Dirección Nacional de Migraciones. Es así que ahora se puede elaborar un listado bastante fiable para construir el universo de causas judiciales (con las limitaciones que se discutirá más adelante), consultar todos los pasos dentro del trámite judicial y todas las sentencias.

Entonces, para obtener un listado de las actuaciones que incluyeran a la Dirección Nacional de Migraciones (autoridad de aplicación de la ley 25.871)<sup>4</sup> se ingresó en la página web del Poder Judicial nacional ([www.pjn.gov.ar](http://www.pjn.gov.ar)) y una vez allí, en “consulta de causas” (<http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam>). Entrando en ese vínculo se puede seleccionar “consulta por partes”, donde se insertó “migraciones” (lo cual arrojará los resultados donde

---

<sup>4</sup> Además de su posición de autoridad de aplicación de la ley de migraciones, la explicación de por qué consultar causas donde DNM sea parte (como actora o demandada) obedece también a las limitaciones de los datos que se emplean para clasificar actuaciones. Así por ejemplo, aunque sería ideal conocer todas las causas judiciales que conciernen a personas extranjeras (que fue lo primero que pregunté hace unos años en la Mesa de Entradas del fuero federal de la Capital), la nacionalidad de la persona involucrada no es un criterio válido para buscar actuaciones, aunque sí noté que la voz “expulsión de extranjeros” será una de las palabras claves para clasificar sentencias de Cámara. Lamentablemente, para eso hay que esperar que el expediente termine y que además, cuente con sentencia de segunda instancia (las de primera instancia, por regla, no se publican). Lamentablemente, esto deja fuera posibles causas judiciales contra Prefectura, Policía Federal, Gendarmería Nacional, etc., que no aparecerán en la búsqueda a menos que DNM esté también demandada. Si bien no son específicamente organismos de control migratorio, lo practican.

[Dirección Nacional de] Migraciones sea parte, como actora o demandada o tenga cualquier otro carácter)<sup>5</sup> y luego seleccionar un fuero federal de un listado. Estos son los únicos rangos de búsqueda disponible: no se puede filtrar por años, materia, nacionalidad y sólo se puede insertar una palabra para la “parte” (puede ser por ejemplo un apellido), que además tiene que tener más de seis caracteres, con lo que, por ejemplo, no se puede buscar a la Dirección Nacional de Migraciones por sus siglas (DNM), como sí puede hacerse en la base de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así se accedió a los listados de causas de 15 fueros federales del país sobre un total de 17.

Esto se debe a dos cuestiones. La primera es que, si bien el fuero federal de San Justo existe formalmente, no estaría funcionando. De hecho, no puede seleccionarse en el listado desplegable. Esto quiere decir que sigue subsumido en el fuero federal que corresponde por competencia territorial. La segunda es que no fue posible, por esta vía, acceder a los expedientes del fuero federal de la Capital Federal. La búsqueda por cualquier palabra clave arroja resultados inconsistentes: algunas causas de los noventa, otras de principios de los 2000, ninguna actual y, de hecho, ninguna del 2010 hacia esta fecha. Esto no se debe, por supuesto, a la ausencia de causas judiciales (solo para la investigación doctoral que cubría 2004-2010, se construyó de manera presencial un universo total de unas 700 causas contra o por DNM) sino probablemente a un colapso del sistema para procesar los resultados, aunque esto no es más que una conjetura.

Hecha entonces la búsqueda por cada fuero, el resultado es un listado, ordenado aproximadamente desde el más reciente hasta el más antiguo, que contiene número de expediente, “dependencia” (último juzgado, cámara o corte donde estuvo), “carátula”, “situación” (última actuación en el proceso) y fecha de ésta. La “carátula” está compuesta por el nombre de quien inicia el juicio y quien es demandado en él, separados por la palabra “contra”, que se completa con el “objeto de juicio”, que es una manera nomenclada de clasificar procesos, de la cual puede deducirse el fondo del asunto; o a veces, solo el tipo de

---

<sup>5</sup> El motor de búsqueda permite seleccionar que parte quiere buscarse. Además de las clásicas “actora” y “demandada”, incluye: damnificado, denunciante, fallido, ejecutante, interventor y un sinnúmero de posiciones que una persona o institución puede tener en un proceso. Como es opcional, lo dejé en blanco para abarcar todas las posibles.

procedimiento), Incluye un ícono para acceder a las actuaciones. En la imagen a continuación se incluyen algunos resultados.

*Imagen 2. Búsqueda “Migraciones” y resultado tipo, para un fuero*

The screenshot shows the 'Sistema de Consulta Web' interface. At the top, there's a header with the system name and navigation links like 'Nueva Consulta Pública', 'Registrarse', and 'Iniciar sesión'. Below this is a section titled 'Lista de Expedientes'. There are filters for 'Jurisdicción' (set to 'FCT - Justicia Federal de Corrientes'), 'Tipo Parte' (set to 'Seleccione una opción'), and 'Parte' (set to 'MIGRACIONES'). Below the filters is a table with the following data:

Expediente	Dependencia	Carátula	Situación	Últ. Act.
FCT 003208/2018	JUZGADO FEDERAL DE CORRIENTES 1 - SECRETARÍA 1 CIVIL	RUIZHUMEI. SHI C/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO (DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES) S/RECURSO DIRECTO A JUZGADO	EN DESPACHO	26/04/2018
FCT 002844/2018	JUZGADO FEDERAL DE CORRIENTES 1 - SECRETARÍA 1 CIVIL	JIALIANG. LIN C/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO (DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES) S/RECURSO DIRECTO A JUZGADO	EN DESPACHO	26/03/2018

Fuente: captura de pantalla desde el sitio <http://scw.pjn.gov.ar/scw/consultaParte.seam?cid=287639>

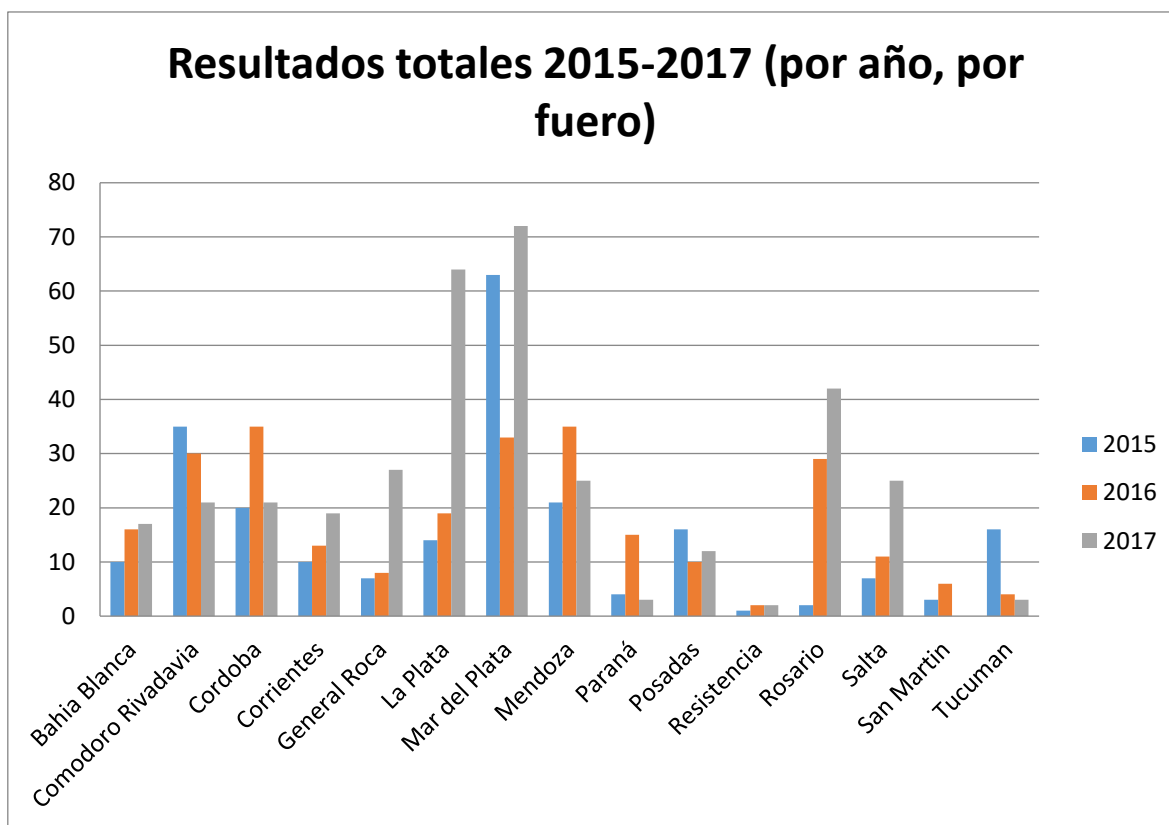
En el ejemplo de la imagen, se buscó “migraciones” en la base de la Justicia Federal de Corrientes; el primer resultado indica el número de expediente y el año en que fue iniciada la causa, el juzgado donde tramita (Juzgado 1, Secretaría 1 Civil), la “carátula”, que será una tapa impresa que encabeza el expediente, la situación procesal actual (“a despacho”, lo que significa, en los hechos, que no está para ser consultado; cuando es así la situación es “en letra”) y la fecha de la última actuación.

Es así que mediante el empleo de las bases de datos públicas del fuero federal se ingresó en cada una de las quince secciones seleccionadas y se obtuvo los listados de todas las causas judiciales que tuvieran a “migraciones” como parte. De estos listados se hizo una primera depuración según el rango de fechas seleccionado (2015-2017); se obtuvo un universo compuesto por unas ochocientas (800) causas sobre las cuales se buscará presentar un mapeo de la cantidad, tipo de proceso y comparación con años previos, para tener una perspectiva del posible impacto del cambio de gestión o del decreto 70/2017. El procesamiento es mayormente cuantitativo dada la amplitud de la muestra.

### 3. Resultados

El total de resultados con la búsqueda de parte actora o demandada “migraciones” se presenta en el cuadro a continuación. Esta búsqueda no implica que se trate de actuaciones por control migratorio o que involucren necesariamente a persona extranjera alguna. Lo que indica es que DNM es parte del proceso.

*Gráfico 1. Listado total de resultados con parte “Migraciones”, por año y fuero*



Fuente: elaboración propia sobre la base de los resultados obtenidos de múltiples búsquedas en <http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam>

Los resultados, como se ve, se presentan bastante dispares y no hay un claro aumento de causas judiciales. De hecho, siete fueros han registrado una tendencia ascendente en los tres años, pero tres fueron descendentes y cinco contaron con inflexiones o picos en 2016. El análisis de estos últimos permite ver otra realidad.

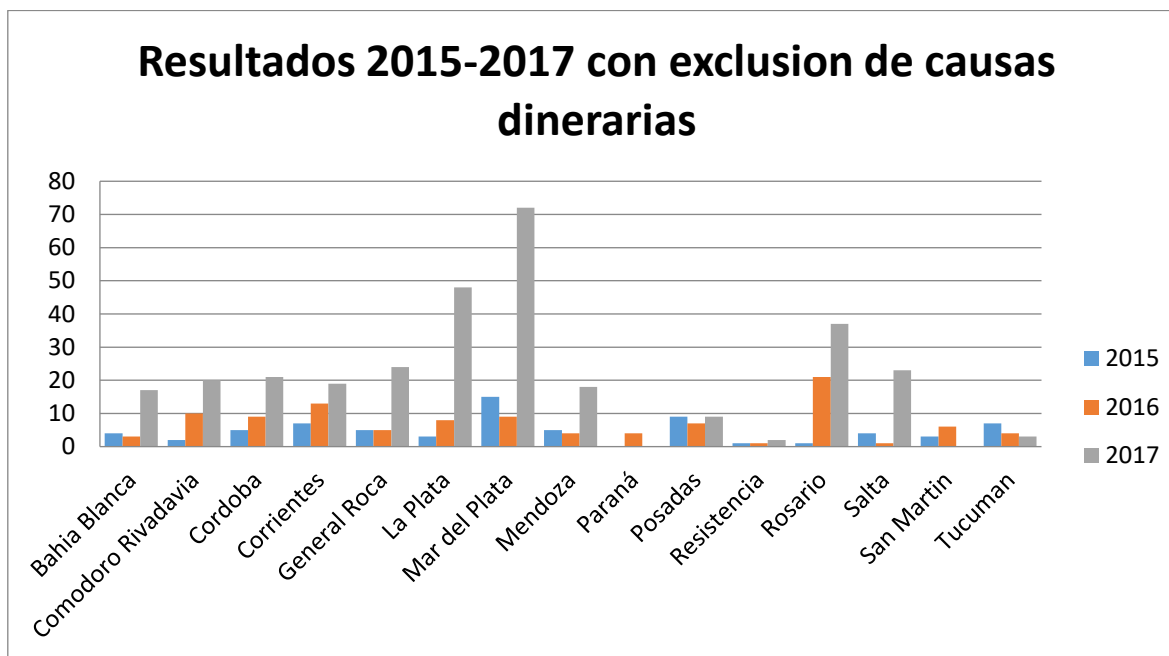
Como mencionaba, los resultados para “migraciones” incluyen todos los juicios iniciados por ella o contra ella, donde sea demandada. Muchos de los primeros corresponden a ejecuciones fiscales (generalmente por imposición de multas) que, aunque sean muy interesantes para conocer un poco más sobre la actuación de DNM, no están relacionados con el DNU 70/2017. Así, en los cinco fueros que presentan inflexiones, el resultado desde esta perspectiva es que: (i) en el fuero de Córdoba, que tiene un pico de causas en 2016, 26 sobre 35 causas son ejecuciones fiscales; otro tanto ocurre para 2015, con 15 ejecuciones fiscales sobre 20 causas en total; (ii) en Mendoza, se trata de 31 ejecuciones fiscales sobre 35 causas en total para 2016 y en 2015, de 21 causas 16 son ejecuciones fiscales; (iii) en Paraná, las 15 causas que generan un crecimiento en 2016, están compuestas por 11 ejecuciones fiscales.

De esta manera, las ejecuciones tergiversan los resultados en cuanto a la aplicación del decreto 70/2017.

Incluso en el caso de Mar del Plata, que es el que cuenta con mayor número de causas judiciales, de los 63 expedientes de 2015, 28 son ejecuciones fiscales y 20 cobros de sumas de dinero, lo que nos deja en realidad con 15 causas que puedan estar relacionadas con el control migratorio. Otro tanto ocurre en 2016: de un total de 33 causas, 8 son ejecuciones y 16 cobros de suma de dinero, lo que nos dejaría con 9 causas. Sin embargo, esto no ocurre en 2017, donde de 72 causas, 63 son contra Dirección Nacional de Migraciones.

En el gráfico a continuación se eliminan entonces aquellas causas que, por su objeto de juicio, sean “ejecuciones” (“fiscales” o “varias”) y “cobro de suma de dinero” iniciados por DNM. Quedan entonces causas donde DNM es demandada (recursos directos para juzgado y en menor medida, amparos, hábeas data, “contencioso administrativo varios”, impugnación de acto administrativo, nulidad de acto administrativo, amparo por mora y otros varios) y otros donde suele ser la demandante (“retenciones”).

Gráfico 2. Resultados 2015-2017 (por año, por fuero), excluyendo juicios monetarios



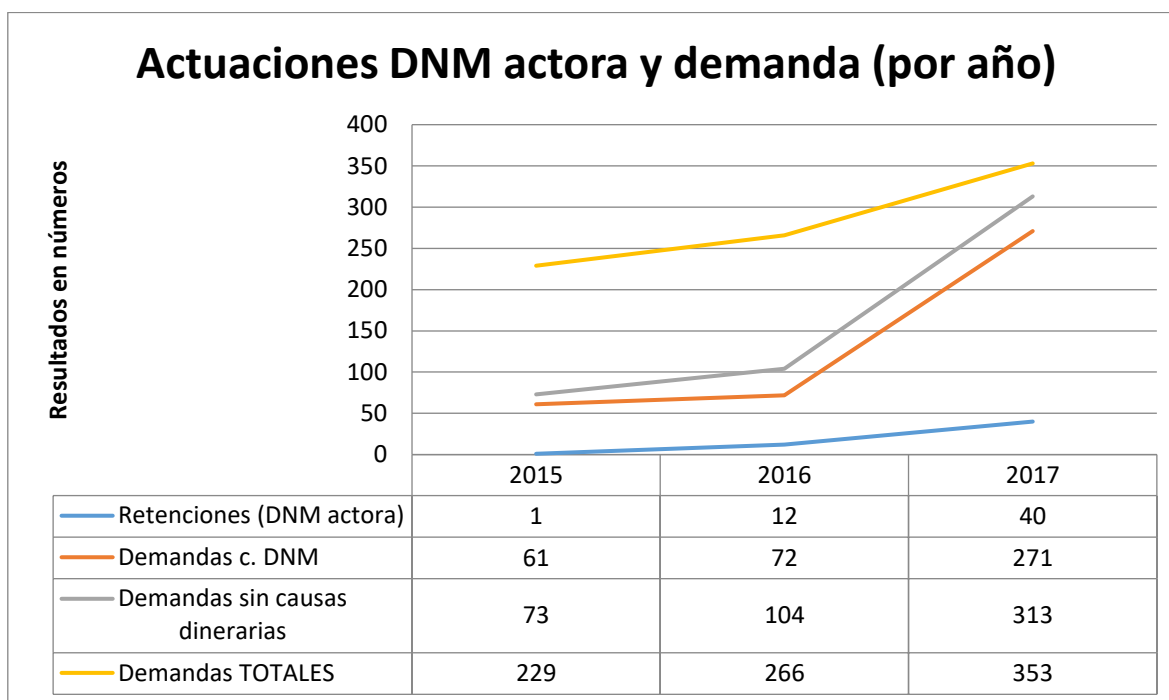
Fuente: elaboración propia sobre la base de los resultados obtenidos de múltiples búsquedas en <http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam>

De esta manera se observa más claramente una tendencia ascendente, con excepción de Tucumán y Paraná. Esto parece reforzarse si se consulta los resultados para 2018: para estos primeros tres meses del año (febrero-abril), se habrían iniciado solo dos juicios en Tucumán y ninguno en Paraná.

Casi para finalizar, un tercer gráfico pone de manifiesto la tendencia ascendente para las causas contra DNM y para los pedidos de retención efectuados por este organismo.



Gráfico 3. Resultados DNM actora o demandada (por año, todas las jurisdicciones)



Fuente: elaboración propia sobre la base de los resultados obtenidos de múltiples búsquedas en <http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam>

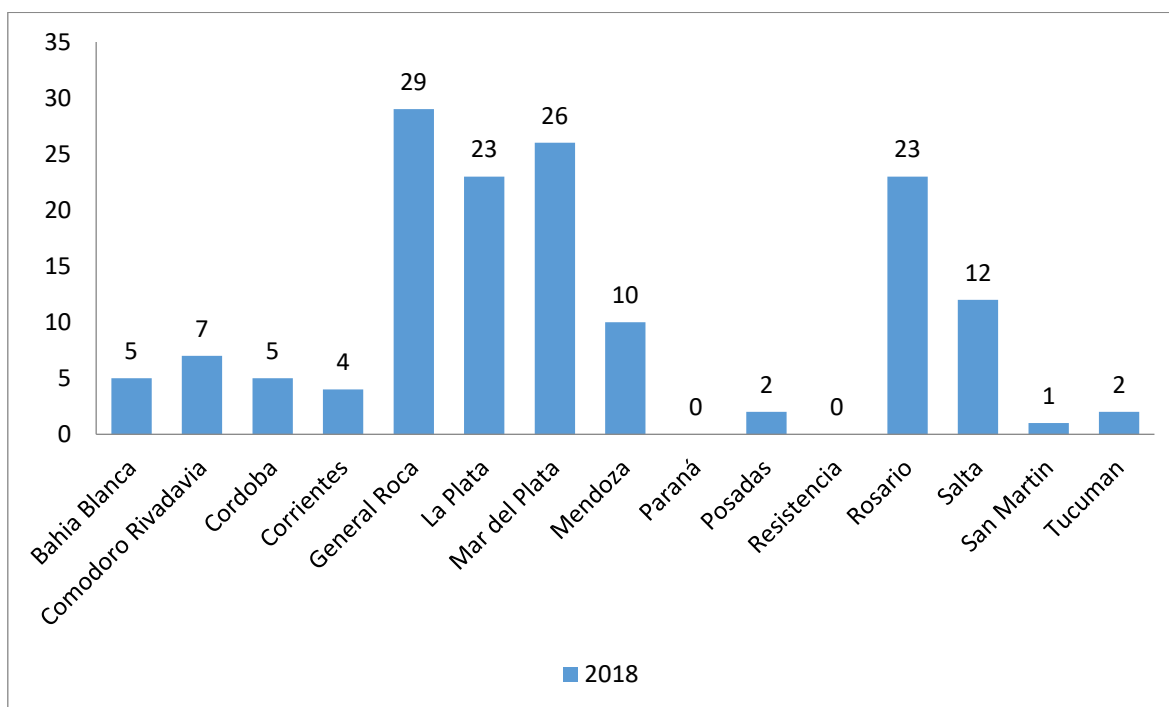
La última línea del gráfico (en azul), indica todas las acciones judiciales iniciadas por DNM para lograr la autorización judicial que permita retener a una persona extranjera para ser expulsada; la siguiente línea en orden ascendente corresponde a todas las demandas iniciadas contra DNM. Las otras dos proveen contexto: la línea verde es el total de demandas por y contra DNM con la última exclusión hecha (ejecuciones fiscales y cobros de suma de dinero) y la primera línea, en violeta, refiere a todas las demandas, sin ninguna exclusión (gráfico 1 de resultados totales).

Como se ve entonces en el gráfico precedente, tanto las demandas contra DNM (que son en su mayoría por recursos judiciales directos y en menor medida, amparos, juicios más largos, beneficios de litigar sin gastos), como los pedidos de retención a los fines de la expulsión, han crecido grandemente.

Por último, en el gráfico a continuación se expresan los resultados para esta primera parte del año, hasta principios de abril de 2018, sumando todos los fueros relevados. En total, se

registraron 149 actuaciones que corresponden casi en su totalidad a demandas contra DNM, con la excepción de algunas ejecuciones fiscales (quince) y una docena de retenciones. Esto permite comparar estos resultados con aquellos del gráfico 2.

*Gráfico 4. Resultados para “migraciones”, año 2018, quince fueros.*



Fuente: elaboración propia sobre la base de los resultados obtenidos de múltiples búsquedas en <http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam>

En comparación con el gráfico 2, la cantidad de causas promovidas en los tres primeros meses de 2018 (febrero, marzo y abril, ya que enero es mes de feriado judicial) supera al total de 2017 en un fuero (General Roca se contaban 29 en 2018 frente a un total de 23 en 2017) y en otros ronda la mitad: 23 en La Plata cuando hubo 48 en 2017; 23 en Rosario frente a 37 en 2017; 10 en Mendoza sobre 18 en 2017.

Luego de este panorama, se pondrá en discusión estos resultados preliminares con la actuación de la Dirección Nacional de Migraciones en el mismo período.

Primero, debe advertirse la dificultad, bajo la nueva gestión de gobierno, para acceder a datos públicos del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, la Procuración Penitenciaria de la Nación advierte que

Como otras agencias del Estado Nacional, tampoco la Dirección Nacional de Migraciones produce, sistematiza ni publica datos sobre la retención de personas extranjeras. Ello impide que los organismos del Estado y la sociedad civil, sepan cuando una persona extranjera es retenida a no ser por los medios informales por los cuales podría circular tal información (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2017: 13).

Con anterioridad, las estadísticas de expulsiones, radicaciones aceptadas y rechazadas y otras estaban disponibles en la página web de DNM. Ahora sólo contamos con el total de radicaciones resueltas (que como bien señala la Defensoría del Pueblo, “no significa que la DNM haya otorgado la residencia, sí que ha resuelto el expediente de solicitud de radicación” –Defensoría 2016: 18), con los controles de permanencia y con los números globales de ingreso y egreso de personas.

En las conclusiones se elaboran algunas conjeturas y mencionan algunas ausencias.

#### **4. Discusión de resultados y conclusiones**

Para medir el alcance de los resultados señalaré primeramente algunas limitaciones de esta investigación y de la metodología empleada. La mayor es probablemente la falta de resultados para el fuero de la Capital Federal, sin dudas el más importante. Según las estadísticas disponibles, es la sede que más órdenes de expulsión y operativos de control de permanencia realiza. Lamentablemente, los resultados por la base de datos pública son inconsistentes ya que, como se señaló, no arrojan ninguna causa judicial desde 2010 en adelante.

Otro dato no menor es que las búsquedas hechas por las bases de datos no reconstruyen un universo totalmente fiable: hay expedientes “perdidos”, que no aparecen en los listados generales. Esto se ha notado y anotado con anterioridad y los listados entregados directamente por la Cámara también omiten expedientes (García, 2013). Eso no fue advertido sino hasta que la autora efectuó la recorrida personal por los juzgados, consultando todas las causas judiciales de Dirección Nacional de Migraciones: en varias oportunidades se encontró expedientes que, pese a corresponder en rango a su búsqueda, no se encontraba en los

listados. En su momento consultó a algunos operadores judiciales y aunque sabían del problema, desconocían su origen.

La tercera limitación es que la búsqueda no incluye muchos hábeas corpus, una de las principales vías de ataque ante privaciones de la libertad sin orden judicial o de retenciones excesivas. Ello, porque muchas de estas acciones se presentan ante el fuero federal criminal y correccional, cuyas actuaciones no están disponibles al público. Con todo y como nota marginal, se pudo notar que todavía existen conflictos de competencia (entre la justicia administrativa y la penal) para estas acciones.

Hechas estas aclaraciones, se apuntan algunos resultados. El primero es que se registra un importante aumento de causas judiciales, más contra DNM que iniciadas por esta. Entre 2016 y 2017, las actuaciones crecieron en un 276%, cuando entre 2016 y 2015 lo habían hecho en un 18%.

En segundo tiene que ver con las “retenciones”: Aunque aquí solo fueron volcados los números totales de todas las jurisdicciones por año, algunas no contribuyeron con actuación alguna. Para los tres años relevados y según los resultados de la base de datos, no se promovió ningún pedido de retención en Bahía Blanca, Córdoba, General Roca, Paraná, Posadas, Resistencia y Tucumán. En otros casos, hay años en los que una jurisdicción no aporta ningún resultado: Corrientes tuvo ningún resultado para 2015 y 2016 y sólo 1 para 2017. Por su parte, Salta en 2015 y 2016 no tendría ninguna retención, pero en 2017 arroja 15. Otro tanto ocurre en La Plata, con ningún resultado hasta 2017, donde registra 14.

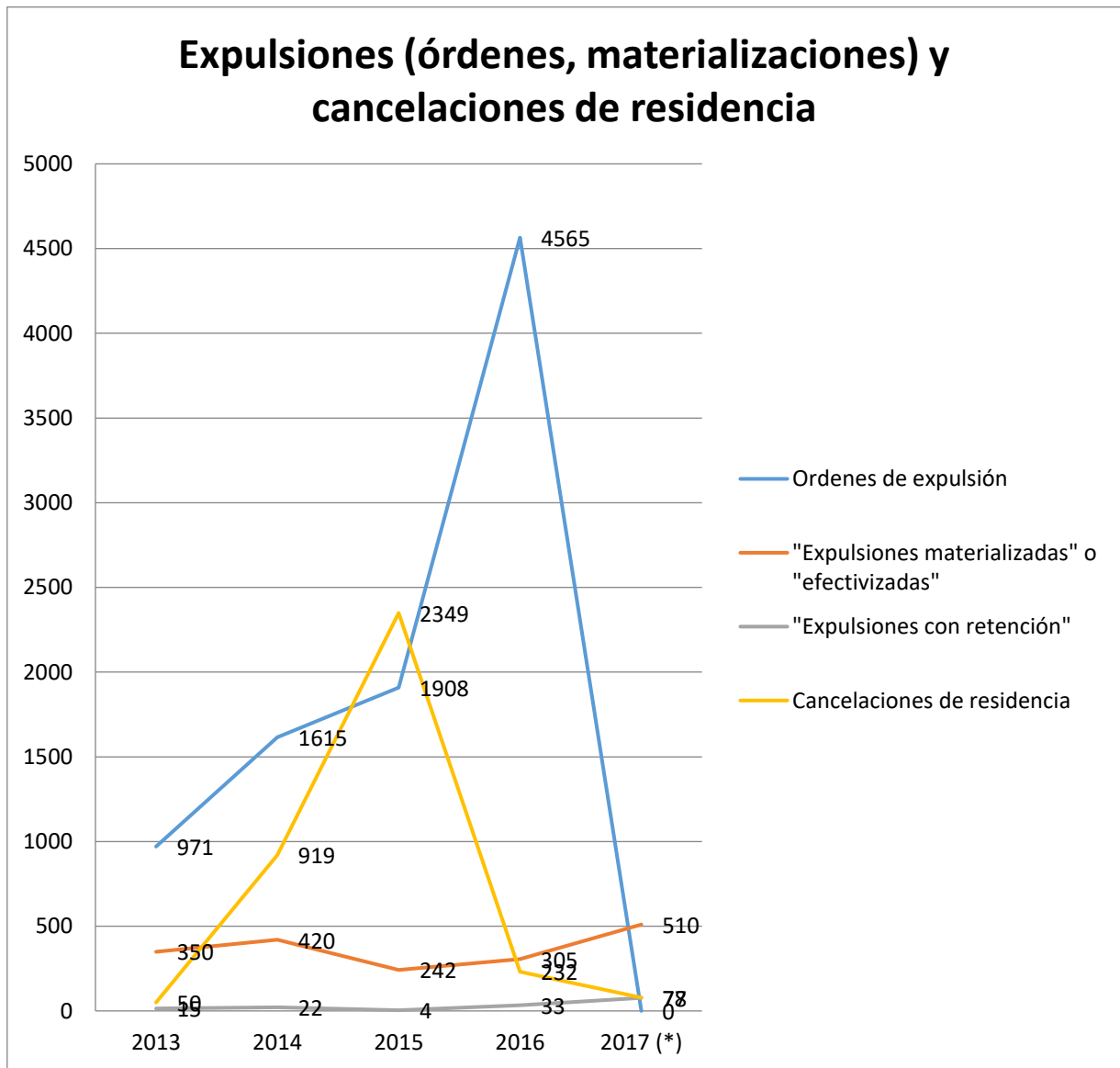
Sobre esto podemos hacer algunas conjeturas. La más improbable, a mi juicio, es que se trate de un excesivamente pésimo registro del sistema o del procesamiento de resultados, en parte por esta situación que se explicaba párrafos arriba en la cual se “pierden” expedientes, informáticamente hablando. Sin embargo, sería exagerado que el sistema no registrara en absoluto sus actuaciones, arrojando “cero” para varios años y jurisdicciones. Del hecho de que algunas no aparezcan listadas no puede deducirse que no se computen en absoluto. Además, en un mismo fuero hay años donde no hay resultados, pero en otros años sí, como en Salta, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Corrientes, San Martín.

La segunda conjetura es entonces que esos sean, en más o en menos, los números reales. Surge entonces la pregunta de cómo es posible que algunos fueros no registren siquiera una retención. ¿Se tratará de provincias donde no se expulsa a nadie en absoluto, o sólo desde la delegación? ¿O se expulsan sin previo pedido de retención? Una tercera posibilidad, un poco más técnica, es que las retenciones para personas residentes de hecho en esos territorios se tramiten en otros fueros (con más probabilidad, en Sede Central), que podría ocurrir si la persona inicialmente declaró un domicilio en la órbita de la sede central (Ciudad de Buenos Aires) y luego no lo actualizó.

En realidad, la respuesta requiere un poco más de conocimiento sobre cómo funcionan las expulsiones o al menos, de otras fuentes de datos, que infelizmente escasean. En primer lugar, muchas expulsiones se tramitan directamente en la causa penal y estando la persona ya detenida, no se suele pedir la “retención” (García, 2015). En muchos de estos casos “la expulsión funciona como un sustitutivo de las instituciones del régimen penitenciario progresivo, como las salidas transitorias, semilibertad o libertad condicional” (Monclus Masó y Brandariz García, 2014: 144). Para sus estadísticas, DNM distingue las “expulsiones con retención” de los “extrañamientos” dentro de las expulsiones totales; estos últimos corresponden a personas con causa penal. Así por ejemplo, en marzo de 2017 los datos para DNM informaban las siguientes expulsiones totales y con retención, de donde se pueden deducir aquellas para extranjeros privados de libertad.

En el cuadro a continuación se presentan las estadísticas existentes para órdenes de retención, expulsiones en las dos modalidades y cancelaciones de residencia.

*Gráfico 5. Actuación de DNM: órdenes de expulsión, expulsiones efectivizadas y cancelaciones de residencia (2013-2017)*



(\*) No hay datos disponibles para las órdenes de expulsión en 2017. Para las cancelaciones de residencia, el número para 2017 (78) corresponde a marzo 2017.

Fuente: Elaboración propia sobre Argentina-Congreso de la Nación (2017 y 2018).

En agosto de 2017 la prensa anunciaba que el gobierno preveía aumentar las expulsiones de extranjeros con causa penal en un 70% (Dinatale, 2 de agosto de 2017). El salto de las 272

expulsiones con causa penal en 2016 a las 433 a que se llegó a finales de 2017 (Congreso de la Nación, 2017) confirma con creces el cumplimiento de esta meta.

Tomo entonces dos períodos totalmente comparables: 2015 y 2016. Para ese primer año, las órdenes de expulsión habían aumentado desde 1615 en 2014 hasta 1908 en 2015 para luego trepar hasta 4565 en 2016 (Gráfico 5; en tanto, las acciones judiciales contra DNM que impugnan actuaciones sobre control migratorio pasaron de 61 en 2015 a 72 en 2016 para trepar a 271 en 2017. Lo primero que se puede advertir es el enorme desfasaje entre órdenes de expulsión e impugnación de ellas, algo que ya había notado con anterioridad para la Ciudad de Buenos Aires (García, 2013). Lo segundo es que el importantísimo aumento de órdenes de expulsión en 2016 no tuvo un correlato en impugnaciones judiciales: mientras que las primeras se duplicaron, las acciones judiciales apenas crecieron en un 18%. Donde el crecimiento de acciones va a ser espectacular (de 2016 a 2017), no contamos, por ahora, con órdenes de expulsión a los efectos de hacer la comparación.

Por otro lado, los números de las expulsiones con retención guardan solo cierta relación con las causas judiciales: en 2015 DNM informaba 4 expulsiones con retenciones (Gráfico 5), mientras que, en causas judiciales, se contaba 1 (Gráfico 3); en 2016, 33 expulsiones con retención por un lado frente a sólo 12 pedidos de retención hechos por DNM y en 2017, 78 expulsiones previo retención y 40 pedidos judiciales. Esto muestra que ambas están en tendencia ascendente (tanto las expulsiones con retención en sí mismas como los pedidos judiciales previos que debe hacer DNM para “retener” a los efectos de expulsar), pero es difícil establecer la relación entre unas y otras: desde que hay más expulsiones con retención, parecería que las primeras ejecutan órdenes de retención habidas en años anteriores, para lo cual habría que obtener el “stock” total de órdenes judiciales de retención que DNM ha acumulado a lo largo del país y comprobar que sea equivalente a las expulsiones materializadas. De lo contrario, se trataría de retenciones sin autorización judicial previa y por tanto, ilegales.

Por otro lado, ¿Que puede decirse del aumento de demandas contra DNM?

La hipótesis con la que se llegó hasta aquí es que el aumento en las cancelaciones de residencia y la mayor cantidad de órdenes de expulsión dispararían las impugnaciones de personas que desean quedarse en el país. Sin embargo, si los números son fidedignos, el pico

de cancelaciones de residencia se dio en 2015, cuando se registraron 2349 frente a 919 en 2014 y 232 en 2016 (Congreso de la Nación, 2017). Nos queda entonces prestar atención a las órdenes de expulsión, que realmente han tenido un crecimiento gigantesco en 2016: de 1908 disposiciones dictadas en 2015, en 2016 se emitieron 4.565 (ver Gráfico 5). Si bien las órdenes de expulsión registran una tendencia ascendente al menos desde 2012, nunca se habían duplicado. Sin embargo, las causas judiciales se dispararían recién en 2017. Esto sugeriría que el crecimiento de causas judiciales está más relacionado con el decreto 70/2017 que con el aumento de las órdenes de expulsión o el cambio de gestión gubernamental.

Podría ocurrir aquí una combinación de dos factores: el achatamiento de la instancia recursiva ante DNM junto con el plazo escaso para la presentación del recurso judicial una vez terminada la instancia administrativa. Como vimos, el proceso sumarísimo creado mediante el DNU (que abarca prácticamente todos los casos) deja en pie sólo una de las instancias administrativas (el recurso jerárquico), eliminando el de reconsideración y el de Alzada (art. 69 quinquies). Entre los tres recursos se formaba un verdadero proceso administrativo, de considerable duración sobre todo por la demora hasta en años por la Administración (Defensoría de la Ciudad, 2017). Al eliminarse dos instancias, el paso por DNM es más rápido. A esto se suma que el recurso judicial debe interponerse en apenas tres días cuando antes se contaba con treinta. Esto produce, junto con un adelgazamiento de las instancias recursivas administrativas (que, por demás, son ellas un derecho del administrado), un pronto desplazamiento de los reclamos hacia el Judicial. Esto, junto con los otros brevísimos plazos dispuestos por el DNU, pone en jaque tanto las capacidades de los juzgados como de las defensorías y las fiscalías que dictaminan competencia, atentando contra un debido proceso.

En suma, el Poder Judicial tiene frente a sí no sólo la posibilidad concreta de revertir una política regresiva como propone el decreto (por ejemplo a través de la Corte Suprema de Justicia, que tiene entre sus manos la causa judicial promovida por varias organizaciones de la sociedad civil contra el decreto 70/2017) sino que, de no hacerlo, verá ante sí un aluvión de demandas provocadas tanto por la maquinaria expulsiva de la Administración como por el prontísimo traslado de los reclamos a la vía judicial.



## Referencias bibliográficas

- Alvites, A. (2017), Control de ingreso y permanencia: miradas preliminares sobre las apuestas de Cambiemos en torno a la política migratoria argentina, en *Tensiones en la democracia argentina: Rupturas y continuidades en torno al neoliberalismo*, Córdoba, pp. 141-154.
- Alderete, Jimena et. Al. (2017), Acceso a la justicia, territorio y población migrante. Las representaciones sociales y el DNU 70/2017. Ponencia presentada en las X Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional, La Plata, 14 y 15 de septiembre de 2017. Disponible en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63516>
- 
- Caggiano, S. (2017), “La nueva política migratoria argentina: control y exclusión”, *Megafón*, nro. 14 (agosto 2017). Recuperado de: [https://www.clacso.org.ar/megafon/pdf/Megafon\\_14\\_3\\_SERGIO\\_CAGGIANO.pdf](https://www.clacso.org.ar/megafon/pdf/Megafon_14_3_SERGIO_CAGGIANO.pdf)
- Ceriani, P. (2017), *Dictamen técnico sobre DNU 70/2017 que reformó la ley de migraciones* 25.871, 24 de marzo de 2017. Disponible en: <http://iarpidi.org/2017/03/24/dictamen-tecnico-sobre-el-dnu-702017-que-reformo-la-ley-de-migraciones-25-871/>
- Ceriani, P., Morales, D. y Ricart, L. (2006), Los derechos de los extranjeros en la jurisprudencia argentina (1994-2005) en V. Abramovich; A. Bovino y C. Courtis (comps.), *La aplicación local de los tratados de derechos humanos: la experiencia de una década (1994-2005)*, Buenos Aires: editores Del Puerto, pp. 813-882.
- Congreso de la Nación-Honorable Cámara de Diputados de la Nación
  - (2017), *Informe del Jefe de Gabinete de Ministros a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación* nro. 99, 22 de marzo de 2017. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/informes-al-congreso>
  - (2018), *Informe del Jefe de Gabinete de Ministros a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación* nro. 108, 14 de marzo de 2018. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/informes-al-congreso>

- Courtis, C.; Pacecca, M. (2007), Migración y derechos humanos: una aproximación crítica al <<nuevo paradigma>> para el tratamiento de la cuestión migratoria en la Argentina, *Revista Jurídica de Buenos Aires*, número especial sobre derechos humanos, pp. 183-200.
- Defensoría del Pueblo (2016), *Rechazos en frontera. La aplicación de la categoría pseudo-turista en ciudadanos de países del MERCOSUR*, octubre de 2016. Disponible en: <http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Rechazos-en-frontera-Informe-octubre-2016-FINAL1.pdf>
- Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires (2017): *Informe técnico DNU 70/2017*. Disponible en: <http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/INFORME-T%C3%89CNICO-DNU.pdf>
- Dinatale, M. (2 de agosto de 2017), “Aumentó un 35% la cantidad de extranjeros expulsados de la Argentina”, *Infobae*. Recuperado de: <https://www.infobae.com/politica/2017/08/02/aumento-un-35-la-cantidad-de-extranjeros-expulsados-de-la-argentina/>
- Domenech, E. (2010), La <<nueva política migratoria>> en la Argentina: las paradojas del programa Patria Grande, en C. Pizarro (coord.), *Migraciones internacionales contemporáneas. Estudios para el debate*, Buenos Aires: CICCUS, pp. 119-141.
- Domenech, E. y A. Pereira (2017), Estudios migratorios e investigación académica sobre las políticas de migraciones internacionales en Argentina, *ICONOS. Revista de Ciencias Sociales*, 58, pp. 83-108.
- Monclus, M. (2017), La reforma de la Ley de migraciones mediante Decreto de Necesidad y Urgencia: un retroceso en la política de derechos humanos, *Revista Argentina de Teoría Jurídica*, nro. 18 (octubre 2017), pp. 1-14.
- Monclús, M.; Brandariz García, J. (2014), *Políticas y prácticas de control migratorio. Estudio comparativo del control de los migrantes en los contextos latinoamericano y europeo*, Buenos Aires: Didot.
- García, L.
  - (2017), Decreto 70/2017, Ley de Migraciones y Poder Judicial, *Rubinzal*

*Culzoni Doctrina on-line*, 230/2017, 9 de marzo de 2017.

- (2016), Migraciones, Estado y una política del derecho humano a migrar ¿Hacia una nueva era en América Latina?, *Colombia Internacional*, Universidad de los Andes. vol. n°88. P. 107 - 133. Disponible en: <https://colombint.uniandes.edu.co/index.php/es/revista-no-88>
- (2015), Política migratoria y delitos. Expulsión por causales y penales y derechos bajo la actual ley argentina de migraciones. *Revista Interdisciplinar de Movilidad Humana*, Vol. 23 nro. 45. Disponible en: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1980-85852015000200197&lng=en&nrm=iso&tlng=es](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-85852015000200197&lng=en&nrm=iso&tlng=es)
- (2013), *Nueva política migratoria argentina y derechos de la movilidad. Implementación y desafíos de una política basada en derechos humanos a través de las acciones ante el Poder Judicial (2004-2010)*. Tesis doctoral, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Sept., 2013.
- González, A. (2018), Leyes migratorias y representaciones sociales: el caso argentino, *Autoctonía. Revista de Ciencias Sociales e Historia*, vol. II nro. 1, enero 2018, pp. 74-91.
- Hines, B. (2010), The right to migrate as a human right: the current argentine immigration law, *Cornell International Law Journal*, 43, pp. 471 y ss.
- Naciones Unidas-CAT (Comité contra la Tortura) (2017), *Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina*, CAT/C/ARG/CO/5-6, 24 de mayo de 2017.
- OEA-CIDH (2017), *Informe sobre el 161 Período de Sesiones de la CIDH*. <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/035a.asp>
- Procuración Penitenciaria de la Nación (2017), *Informe de situación de las personas extranjeras retenidas en Argentina en el marco de la aplicación de la ley 25.871*, marzo de 2017. Disponible en: <http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Informe%20CIDH%202017-PPN.pdf>
- Roca, S. (2018), El derecho de acceso a la justicia y la garantía del debido proceso de las personas migrantes en Argentina, *Estudios sobre Jurisprudencia*, Ministerio Público de la Defensa. Recuperado de:

<https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Estudios/2018.01.%20El%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20justicia%20y%20la%20garant%C3%ADa%20del%20debido%20proceso%20de%20las%20personas%20migrantes%20en%20Argentina.pdf>

- Romero, R. (2016), Balance de América Latina en el Giro Neoliberal. Perspectivas políticas y realineamientos internacionales (Conferencia), *XVI Jornadas de Filosofía y Ciencia Política*, Universidad Nacional de Mar del Plata, nov. 2016.
- Rosende, L. (7 de noviembre de 2016), “Se duplicaron las consultas de migrantes por expulsiones, deportaciones y negación de DNI”, *Política Argentina*. Recuperado de <http://www.politicargentina.com/notas/201611/17618-se-duplicaron-las-consultas-de-migrantes-por-expulsiones-deportaciones-y-negacion-de-dni.html>

